



► Los ocho comisionados que integran la instancia han estado reunidos desde el pasado domingo para resolver aspectos que no son fáciles.

Comisión para la Paz se juega horas clave: se evalúan gestiones del Presidente Boric para defender acuerdo por La Araucanía

A un día del plazo final, el gobierno busca contener las tensiones políticas que amenazan con frustrar el cierre de la comisión y su propuesta para la restitución de tierras.

Gabriela Mondaca

A solo un día de cumplirse el plazo para el cierre de su trabajo, la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento no ha dado luz verde al documento que buscará dar una salida al conflicto mapuche en la Macrozona Sur.

Los ocho comisionados que integran la instancia, y que provienen de un amplio espectro político, han estado reunidos desde el pasado domingo para resolver aspectos que, dicen, no son fáciles. Incluso, este lunes sus integrantes fueron convocados a una reunión a eso del mediodía, aunque no todos estuvieron presentes. Por ejemplo, el comisionado Sebastián Naveillán (presidente de la Asociación de Agricultores Malleco) se encontraba en trabajo en terreno en la comuna de Victoria, región de La Araucanía.

Desde el Ejecutivo reconocen, que pese a que ya hay gran parte de los temas

zanjados, la piedra de tope sigue siendo la estimación de tierras que se deberían restituir y las compensaciones del estado para indígenas y víctimas de la violencia en la zona.

Específicamente, uno de los debates pendientes gira en torno al monto destinado para la restitución de tierras: mientras algunos comisionados proponen dejarlo abierto, otros plantean fijar un techo. Se ha hablado de hasta 4.000 millones de dólares, aunque en la práctica el costo real proyectado por el Estado rondaría los 800 millones de dólares, considerando que actualmente el Estado tendría contemplado la inversión de 3.200 millones a esta materia.

En paralelo al trabajo de la Comisión y a los esfuerzos por llegar a un acuerdo que se entregará al Presidente Gabriel Boric, el gobierno ya inició un despliegue para evitar que los partidos le quiten el piso al trabajo de la comisión.

Esto en vista de la presión que el Partido Republicano ha ejercido sobre la senadora Carmen Gloria Aravena, que integra la comisión y ha planteado internamente su disposición a llegar a un entendimiento.

Lo que quiere evitar el Ejecutivo es que los partidos de Chile Vamos se plieguen a la negativa de los republicanos.

Hasta ahora la apuesta era que el exministro Alfredo Moreno, copresidente de la comisión junto al senador DC Francisco Huenchumilla, fuera el puente con los partidos de oposición para refrendar el texto que aun no tiene una versión final. Pero para asegurar un entendimiento, en las últimas horas personeros de gobierno han tomado contacto con dirigentes de partido para evitar que haya una disposición negativa al texto antes de conocerlo.

Si todo falla, la opción de "ultima ratio" es que el Presidente Gabriel Boric inter venga en favor del acuerdo y convoque a una reunión de partidos y comisionados.

Cercanos a la comisión explican que las presiones sobre la parlamentaria se han intensificado en los últimos días, hasta el punto de superar el contenido del informe: Ya no se trata del documento, sino de un posicionamiento político.

En conversaciones privadas entre comisionados, ha trascendido que Aravena ha sido advertida de que su continuidad como candidata estaría en riesgo si suscribe el acuerdo. Algunos interpretan esta presión como parte de una estrategia de diferenciación del partido, en el marco de los eventuales acuerdos entre José Antonio Kast y el diputado Johannes Kaiser, quien podría postular al Senado por la Región de La Araucanía.

Por ahora, las gestiones continúan contrarreloj en busca de mantener a flote un acuerdo que, de concretarse, podría marcar un antes y un después en el tratamiento del conflicto en la Macrozona Sur. ●